

dad política, capacidad de diálogo y legitimidad social. Gobernar no es sólo administrar mayorías circunstanciales, sino también conducir acuerdos que permitan estabilidad institucional y certezas para la ciudadanía.

Chile enfrenta problemas urgentes en seguridad, crecimiento económico, empleo y cohesión social. En ese escenario, el desgaste prematuro del capital político puede transformarse en un obstáculo para concretar soluciones de largo plazo. La ciudadanía hoy exige resultados, pero también prudencia, escucha activa y liderazgo estratégico.

¿Qué hacer? Una humilde sugerencia: avanzar hacia una gobernanza más colaborativa, donde el Ejecutivo fortalezca espacios de conversación con sectores políticos, académicos, territoriales y sociales, priorizando acuerdos mínimos en materias esenciales para el país. La experiencia comparada internacional demuestra que los gobiernos que logran perdurar y generar cambios estructurales son aquellos capaces de equilibrar convicción con moderación.

Rodrigo Durán Guzmán

Recortes

● Los recientes recortes presupuestarios revelados por la Dipres se presentan bajo la promesa de no afectar sustancialmente a la población. Sin embargo, aunque el control del gasto es un imperativo económico -con casos críticos como la paralización de la Ley

Ricarte Soto por falta de fondos-, el problema de fondo no es meramente de caja, sino de eficiencia estructural.

Pese a que Chile se aproxima a los promedios de gasto en salud de la OCDE, esta inversión no se traduce en mejores servicios. El estudio de la UNAB sobre satisfacción en salud pública confirma que la percepción de los pacientes no mejora a la par de los recursos inyectados. Esta realidad se extiende a diversas prestaciones estatales: el aumento de presupuesto no garantiza bienestar si no va acompañado de una gestión de calidad orientada a resultados.

Más allá de las ambiciones políticas, esta falta de coherencia es síntoma de un desorden profundo en las finanzas públicas. Como advertía Mises, la "planificación" estatal carece de los incentivos de mercado que obligan a la eficiencia. Al final, es la confianza institucional la que se debilita, condenando a la ciudadanía a la incertidumbre sobre el futuro de sus beneficios más básicos.

Cynthia Campos Gómez
Fundación para el Progreso

Responsabilidad fiscal

● El debate sobre la eventual eliminación del pago de contribuciones para la primera vivienda de adultos mayores de 65 años plantea una discusión compleja respecto a la equidad tributaria y la sostenibilidad financiera municipal. Desde una mirada social, la propuesta es comprensible. Muchos adultos mayores enfrentan, al jubilar,